

Construir una economía inclusiva

La primera ministra de Islandia analiza la importancia del género al repensar la economía

Katrín Jakobsdóttir



CORTESÍA DE LA OFICINA DE LA PRIMERA MINISTRA DE ISLANDIA

A MEDIDA QUE LOS GOBIERNOS lentamente reemplazan los indicadores básicos basados en el PIB por criterios basados en el bienestar para evaluar el éxito económico, crece la demanda de políticas progresistas de justicia social. De ahí el amplio interés por analizar cómo Islandia, que goza de una economía relativamente fuerte, ha logrado que la igualdad de género se convierta en una parte esencial de sus políticas internas y externas.

La campaña por la igualdad de las mujeres en Islandia ha exigido medidas de gobierno para liberar a las mujeres de estructuras sociales de las que han sido víctimas durante siglos. Esto incluye cambios legislativos a favor de la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, así como sólidas leyes de igualdad y cupos de género en los directorios de las empresas.

Pero también ha requerido políticas que, en términos económicos convencionales, se consideran extremadamente costosas, algo que sigue impidiendo que muchos gobiernos las adopten. Los temas clave

son el cuidado infantil universal y la licencia parental compartida. Si se las aplica adecuadamente, esas políticas pueden modificar la articulación de las esferas pública y privada y las reglas de juego. ¿Por qué? Porque permiten a las mujeres participar en el mercado laboral y en los procesos públicos de toma de decisiones, al tiempo que dejan margen para que los hombres compartan las responsabilidades domésticas. Sin embargo, las políticas favorables a la familia no han ganado el respaldo global que merecen y son vistas por muchos como una gran fuente de despilfarro del gasto público.

Han pasado cincuenta años desde que Robert Kennedy dijera acertadamente que el PIB mide todo excepto aquello por lo que vale la pena vivir. No obstante, los economistas siguen centrándose en lo mensurable, dividiendo los desembolsos del gobierno en dos categorías: gasto e inversión. Este dualismo clasifica el dinero gastado en infraestructura física como una inversión, y, por ende, merecedora de fondos públicos. En cambio, la infraestructura social es catalogada como gasto o costo operativo, preferentemente los primeros en ser objeto de recorte. Pero esas son las estructuras que nos sostienen desde el nacimiento (o antes) hasta la muerte y crean las condiciones que hacen que la vida sea digna de ser vivida.

Resulta interesante que la infraestructura física —carreteras, túneles, edificios— sea comúnmente la base del empleo masculino, mientras que las mujeres tienden mucho más a trabajar en servicios asociados con la infraestructura social: educación, cuidado infantil, atención de la salud. Al centrarse en la infraestructura física y dejar de lado la infraestructura social, los economistas y quienes formulan las políticas públicas ignoran una clara verdad: necesitamos ambas para que nuestras sociedades prosperen y se desarrollen. ¿De qué vale un edificio escolar sin una educación de calidad para todos? ¿Qué es un hospital sin la gente que atiende la salud? ¿Y de qué sirven una carretera o un túnel en una sociedad donde el analfabetismo frena la movilidad social?

En esta estrecha visión del mundo, no debe sorprender que el cuidado infantil universal y las licencias parentales se consideren lujos antes que aspectos esenciales de una economía exitosa, cuando en realidad son un componente integral para construir una sociedad donde todos puedan progresar. Si hay algo que los que viven en el siglo XXI —el siglo de la liberación homosexual y femenina— seguramente comprenden mejor que quienes vivieron en el siglo pasado son los beneficios de liberar a las personas de normas y estructuras sociales predeterminadas.

La participación femenina en la fuerza laboral difiere notablemente entre los países que ofrecen un cuidado infantil a costo accesible y aquellos donde las mujeres se ven obligadas a optar entre la familia y la profesión. Cuando los costos del cuidado infantil son altos, las madres de menores ingresos no pueden permitirse trabajar. Por cierto, un cambio cultural podría permitir que se abandone el modelo tradicional de familia donde el varón es el sostén económico. Pero la brecha salarial de género seguirá empujando a los hombres hacia el trabajo y manteniendo a las mujeres en el hogar, y en tanto nuestras sociedades estén construidas de manera tal que las mujeres deban ausentarse mucho tiempo del trabajo para cuidar de la familia, la diferencia salarial seguirá existiendo.

En las últimas décadas, los países nórdicos han desarrollado sistemas de licencia parental compartida que ofrecen una porción específica sujeta a “utilización o pérdida” para ambos progenitores (incluidas las parejas del mismo sexo y los padres adoptivos). El modelo de Islandia —financiado por el gobierno y las empresas— ofrece tres meses de licencia a cada progenitor y otros tres meses que pueden dividirse entre ambos según ellos escojan. Mi gobierno extenderá aún más este derecho, como parte de una iniciativa más amplia orientada a cerrar la brecha entre la licencia parental, y un servicio de guardería de alta calidad, financiado con fondos públicos, que ahora comienza a los dos años de edad. Hoy en día, la brecha se encuentra mayormente cubierta por el cuidado infantil subsidiado.

Junto con el cuidado infantil universal, el modelo actual —implementado en etapas desde 2000— ha transformado la sociedad islandesa, estimulando simultáneamente la economía. Se ha producido un cambio de mentalidad: ahora las familias consideran los deberes parentales y el cuidado de los niños como una responsabilidad conjunta. Los papás han

establecido mejores relaciones con sus hijos, y la vieja excusa de que no se pueden contratar o promover mujeres porque (¡todas!) abandonarán el mercado laboral ya no se sostiene. En lo personal, yo no sería a la vez primera ministra y madre de tres maravillosos muchachos si no fuera por las políticas a favor de la familia que implementa mi país.

¿Significa esto que Islandia ha encontrado la solución y que todos gozan de iguales derechos y oportunidades? Lamentablemente, no. La brecha salarial de género todavía existe, y los empleos típicamente ocupados por mujeres siguen estando infravalorados y mal remunerados en un mercado laboral aún demasiado segregado en función del género. No hemos logrado erradicar la violencia y el acoso, y nuestros niños y niñas están sometidos a estereotipos de género como en el resto del mundo. Pero hemos avanzado. La participación femenina en la fuerza laboral es de alrededor de 80%, algo menor que el 87% masculino, pero de todos modos coincide prácticamente con el promedio calculado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos respecto de los hombres. La amplia actividad económica de todos los géneros es uno de los ingredientes clave de la economía de Islandia, cuya tasa de desempleo es notablemente baja: tan solo 2,9%.

La inclusión y liberación de la mayoría, antes que de la minoría, es el camino correcto, no solo desde una perspectiva de justicia social sino también económica. Es una de las muchas razones por las que Islandia hoy participa en el Grupo de gobiernos de economías del bienestar, que trabaja por la sostenibilidad y el bienestar para todos, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La igualdad de género es una parte importante de esta agenda, y no ocurre automáticamente. Exige una visión ideológica, lucha política y acciones por parte de los gobiernos, las empresas y los grupos sociales. La liberación de las mujeres y las minorías sigue siendo una de las tareas urgentes para la política actual. Debemos avanzar con políticas económicas progresistas que desafíen los estereotipos comunes acerca de los costos y beneficios y seguir promoviendo la igualdad de género como parte de una agenda de justicia social con visión de futuro. Nuestra generación será juzgada según el éxito que logremos en este frente. 

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR es la Primera Ministra de Islandia.